



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, doce de agosto de dos mil veintidós**

#### **21-301**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN  
Demandante: **GLORIA EMILSEN CUERVO CASTAÑEDA**  
Demandado: **COLPENSIONES y PORVENIR S.A.**  
Radicado No.: 05001-31-05-004-2018-00601-01.  
Link: [21-301 \(004-2018-00601\)](#) expediente digital  
Tema: Ineficacia traslado  
Decisión: **MODIFICA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las entidades accionadas en el proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 23** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Solicita la parte actora mediante este trámite, en síntesis, que tras la declaratoria de **INEFICACIA** del traslado a la administradora del RAIS, se tenga como válidamente afiliada al régimen de prima media sin solución de continuidad y en consecuencia se ordene a PORVENIR trasladar a Colpensiones las cotizaciones, bonos con los rendimientos causados, además de los descuentos realizados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, gastos de administración, prima de reaseguro, seguros de invalidez y sobrevivientes, todo ello debidamente indexado.

Subsidiariamente solicitó que, en calidad de indemnización de perjuicios materiales y materiales, se ordene a Porvenir S.A. reconocer la eventual pensión de vejez con sujeción a los requisitos de edad, tiempo y monto previstos en el régimen de prima media, además del pago de 100 SSMLMV con su respectiva indexación.

## **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EN SÍNTESIS, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- ✓ Que nació el 1º de enero de 1964.
- ✓ Que estuvo afiliada con el ISS desde el 5 de mayo de 1981 hasta el 11 de febrero 2003 cuando se trasladó a la AFP Porvenir.
- ✓ Que al momento de la afiliación, el asesor del fondo privado no le explicó los pro y contra de tomar esa decisión y nunca se detuvo advertirle las características de ambos regímenes.
- ✓ Que el asesor solo le manifestó que el RPM iba a desaparecer por lo que debía afiliarse con Porvenir donde tenía asegurada su pensión con las mismas garantías, con un monto más alto y el beneficio de la pensión heredable
- ✓ Que tras petición realizada a Porvenir, esta entidad le informó que cuando tuviese 57 años derecho a una pensión equivalente al salario mínimo, que de permanecer en el RPM la mesada ascendería a \$1'132.300, que además no existen soportes de alguna re-asesoría, ni la brindada al momento de la afiliación.
- ✓ Que solicitó traslado a Colpensiones, pero le fue negada dicha petición por estar a menos de 10 años de cumplir la edad para pensionarse.

## **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido. Inicialmente se pronunció COLPENSIONES aceptando los hechos relacionados con la edad de la actora, fecha de afiliación y la reclamación elevada. Por su parte PORVENIR adujo que le suministró a la demandante la información pertinente, suficiente y completa en los aspectos que reseña.

## **1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia de la afiliación de la demandante a la administradora del RAIS,

entendiéndose que esta había permanecido en el régimen de prima media sin solución de continuidad. CONDENÓ a **PORVENIR S.A.** retornar a COLPENSIONES, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la sentencia, todas las sumas que recibió con ocasión del traslado y todas las que actualmente reposen en la cuenta de ahorro individual de la actora, como cotizaciones, aportes, rendimientos financieros causados, incluyendo las cuotas de administración, pagos de seguro y reaseguro, pagos al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, estos últimos tres debidamente indexados desde su causación hasta el momento del pago.

De otro lado ORDENÓ a COLPENSIONES recibir tales sumas y reactivar la afiliación de la actora en dicho fondo, imponiéndole como MEDIDA CAUTELAR que no podía negar el reconocimiento pensional aduciendo que no le habían remitido los valores de la cuenta de ahorro individual a satisfacción y equivalencia.

De otro lado, ABSOLVIÓ a PORVENIR S.A. del pago de la indemnización de perjuicios, pero sí la condenó en costas, fijando como agencias en derecho la suma de \$3.500.000 a favor de la demandante.

Dentro del término concedido por la ley, tanto COLPENSIONES como PORVENIR S.A. interpusieron y sustentaron el recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR**

Respecto a la ineficacia declarada, la decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de la administradora del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

En cuanto a los perjuicios deprecados, que erradamente entendió como una pretensión principal, pese al carácter subsidiario con el que se estipuló en el libelo genitor, adujo que los que eventualmente pudiesen causarse se verían resarcidos con el retorno al régimen de prima media, sin observar ningún tipo de lesión que tuviese que repararse de esta forma.

Y frente a la medida cautelar innominada consideró pertinente su imposición oficiosa, al señalar que podría ponerse en riesgo el derecho pensional especialmente si se tenía en cuenta que la actora ya satisfacía el requisito de la edad, tornándose improcedente someter el derecho al pago de los

conceptos que le correspondía retornar a Porvenir, máxime si Colpensiones contaba con las herramientas para ejecutar el fallo, evitando así ese riesgo fundado y por el contrario garantizando el acceso a la pensión, especialmente si tenía acceso a la historia laboral y se financiaba con una bolsa común de naturaleza pública.

## **2.2. RECURSO DE APELACIÓN**

### **2.2.1. PORVENIR**

Considera que no se probó de forma fehaciente y concluyente la afirmación de la parte actora, quien alegó sufrir un menoscabo o que no fue informada de los alcances que tiene el régimen de ahorro individual y que a su vez indicó que suscribió los documentos con un desconocimiento acerca de lo que representaba dicha afiliación. Que bajo el supuesto que se hubiese configurado un error de hecho, se debía verificar los vicios del consentimiento, acción respecto de la cual ya había pasado el cuatrienio de la prescripción, razón por la cual no habría lugar a declarar la ineficacia.

Igualmente estimó que no existió una omisión frente a la información brindada al momento del traslado, teniendo en cuenta que dentro de la prueba documental obraba formulario de vinculación suscrito por la demandante con puño y letra, oportunidad en la que cumplió con lo establecido en el Decreto 656 de 1994 y 652 de la misma anualidad, los cuales detallaban cuáles eran los requisitos que debía contener estos formularios, razón por la cual considera que la vinculación gozaba de plena validez, máxime si hubo un acompañamiento a través de los de extractos enviados sobre el balance del estado de la cuenta de ahorro individual de la afiliada.

Frente a la devolución de las cuotas de administración debidamente indexadas, que incluía los seguros previsionales y el fondo de garantía de pensión mínima, adujo que era improcedente, por cuanto la base de tal orden eran los artículos 1746 y 963 del Código Civil, a partir de los razonamientos de la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia 31989, empero dicha normativa lo que regulaba era la figura de las restituciones mutuas operante cuando el bien administrado había sufrido un detrimento, para el caso inexistente toda vez que NO se había acreditado en el plenario que las cotizaciones efectuadas por la afiliada fueron administrados de una forma indebida. Por el contrario, NO presentó depreciación del dinero depositado en la cuenta de ahorro individual, pues se incrementó notablemente. Aunado a lo anterior, la figura aludida NO fue contemplada en el Decreto 3995 de 2008 en cuyo artículo séptimo se estableció que de los tres conceptos mencionados por el juez, el traslado únicamente debía incluir un porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. En todo caso NO era financieramente posible el traslado del seguro previsional ya que fue sufragado a la compañía aseguradora, entidad que cumplió con el

deber contractual de mantener la cobertura de la póliza durante la afiliación para cubrir las contingencias sobrevinientes durante la afiliación al RAIS, tercero de buena fe que obró bajo la presunción de validez y legalidad del acto

Bajo la situación descrita, reitera que NO existe un deterioro o un menoscabo frente a la administración de los recursos de la seguridad social, incluso la tendencia era que los rendimientos fuesen muy superiores al capital acumulado, razón que aunada a las ya reseñadas, evidenciaban la improcedencia de la indexación. Expone que a voces de la sentencia SU-062 de 2010, lo que debía existir era una equivalencia del aporte, la que se presentaba de cara a los rendimientos causados. Que en tal sentido NO existía un fundamento de índole financiero, legal o jurisprudencial para ordenar la indexación de las sumas. En este punto añade que algunos de los descuentos efectuados en el RAIS, también se realizan en el régimen de prima media.

Finalmente solicita ser exonerada del pago de costas procesales aduciendo que de acuerdo a la forma cómo se plantearon los medios exceptivos correspondientes, los mismos obedecieron a criterios bajo la presunción de validez y legalidad del acto que en su momento suscribió la actora.

### **2.2.2. COLPENSIONES**

Su oposición se ciñó a la medida cautelar impuesta. Expuso que la fijación del litigio se circunscribió a la declaratoria de ineficacia de la afiliación y aunque la actora cumpliera con el requisito de la edad, 57 años, para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media, ni se había elevado la reclamación administrativa ni mucho menos se había fijado el litigio en ese asunto.

Resalta que es una entidad que administra recursos de naturaleza pública, que los aportes de la actora reposaban en una cuenta en el RAIS y por ende se ordenó su devolución, de ahí que su obligación estaba sujeta a las condiciones previas que debía cumplir PORVENIR como lo era normalizar la afiliación en el SIAF y devolver los aportes en conjunto con el archivo. Aunado a ello, conforme las modificaciones introducidas en la Ley 100 de 1993, los fondos contaban con un término de 4 meses, después de radicada la solicitud con la correspondiente documentación que acredite el derecho, para reconocer la prestación por vejez.

En virtud de lo expuesto, una vez reciba el pago de Porvenir, le corresponde realizar las validaciones pertinentes, resultando contradictorio que el a quo le otorgue un plazo de 30 días a Porvenir para realizar la devolución ordenada, pero de otro lado, le imponga a Colpensiones la obligación de reconocer la pensión, aunque no hubiese recibido tales recursos.

Que no podía hablarse de una responsabilidad automática ni individual de parte COLPENSIONES tan solo porque se declaró la ineficacia de la afiliación de traslado de régimen pensional, y tampoco encuentra procedente que la justificación sea que los recursos son comunitarios, dado que en todo caso era necesario que se hicieran las validaciones en la historia laboral, recibiendo los aportes a plena satisfacción y equivalencia, antes de proceder al reconocimiento de una pensión.

Que de lo contrario se estaría desconociendo el principio de sostenibilidad financiera consagrado en el art. 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, principio que únicamente se garantizaba en la medida en que el Sistema General de Pensiones percibiera a través de medios jurídicos y financieros, los fondos económicos adecuados que le permitieran pagar mes a mes a una mayor cantidad de pensionados y obtener de esta forma un ahorro para prestaciones futuras bajo la permanente orientación de sostener con urgencia cualquier desventaja del bienestar general, lo que conlleva el derecho fundamental a la seguridad social, por la cual se debía proteger el capital pensional toda vez que estamos hablando de un ahorro comunitario, advirtiendo que las consecuencias de la nulidad no podían ser extendidos a terceros, en este caso a la administradora del régimen de prima, ello con fundamento en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 31.989 del 9 de septiembre de 2008 Magistrado Ponente Eduardo López Villegas.

## **2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

### **2.3.1. ALEGATOS DE PORVENIR S.A.**

En los mismos términos esgrimidos al apelar la sentencia, reiteró que no obra dentro del proceso ninguna prueba que respalde en forma fehaciente y concluyente la afirmación de la parte actora en el sentido de que se le omitió información en el momento de tomar la determinación de efectuar el traslado y más aún, teniendo en cuenta que obra prueba documental, esto es, formulario de vinculación a PORVENIR, el cual la accionante suscribió de su puño y letra que tomaba su decisión de traslado en forma autónoma y con el pleno conocimiento. El acto jurídico suscrito por las partes en el momento de diligenciar la vinculación a la AFP de PORVENIR S.A. goza de plena validez y fue producto de la voluntad de ambos contratantes, por lo que no es procedente bajo argumentos que carecen de sustento probatorio, invalidar la manifestación de la voluntad plasmada en el documento de la afiliación el cual es auténtico y goza de plena validez, toda vez que no fue redargüido de falso.

En cuanto a la devolución de los saldos de la CAI con destino al RPM, citó el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008, exponiendo que si lo pretendido es buscar la compensación de aportes entre el RAIS y el RPM, se atiende a dicho interrogante con el traslado en unidades de los aportes realizados

atendiendo a la rentabilidad acumulada y compensándose así las semanas sin que para el fondo común del RPM exista detrimento para sufragar las prestaciones debido a que los rendimientos tienen la tendencia a ser superiores al 50% o 100% el capital acumulado en la CAI, contrario cuando se trata del traslado de aportes provenientes del RPM en la medida que la devolución realmente se efectúa por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el respectivo período de las reservas para pensión de vejez de COLPENSIONES, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos, esto quiere decir que, la equivalencia no atiende a tasas variables que aumentan el capital gracias a los rendimientos, sino a una tasa regular por las reservas que COLPENSIONES tiene para el pago de las pensiones, o a la tasa regular determinada por la Superintendencia Financiera, señalando por lo anterior que no debe ordenarse el reintegro de las cuotas de administración como lo dispuso el A quo.

### **2.3.2. ALEGATOS DE COLPENSIONES**

Solicitó que se revoque el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, la cual ordena a Colpensiones que no podrá negar el reconocimiento pensional aduciendo que no le han remitido los aportes de la cuenta de ahorro individual del demandante a su satisfacción y equivalencia, reiterando lo ya sustentado en recurso de apelación sobre el extremo litigioso fijado, es decir que solo se debe estudiar la ineficacia del traslado de régimen y no lo atinente a la pensión de vejez así la actora cumpla con los requisitos para acceder a tal derecho, añadiendo apartados de la Sala Laboral del Tribunal Superior De Medellín en las que se revoca tal medida en razón de que la pensión de vejez no fue una pretensión propia de esos procesos y por tanto al no haber sido objeto de debate, no debe haber pronunciamiento alrededor de sus posibles consecuencias. Añadió que no puede haber una responsabilidad automática ni individual de COLPENSIONES tan solo porque se está declarando la ineficacia de la afiliación del traslado de régimen pensional, y la justificación no puede ser que como los recursos que administra la entidad son comunitarios o son de un fondo común, entonces la entidad debe concederle la prestación económica a la demandante sin antes haber recibido todos y cada uno de las sumas ordenadas por el Juez de primera instancia, y que en ese orden de ideas la obligación de COLPENSIONES debe estar sujeta a la condición previa que PORVENIR normalice la afiliación en el SIAF y la devolución de los aportes con la respectiva entrega del archivo y el detalle de aportes realizados durante su permanencia en el RAIS

### **2.3.3. ALEGATOS DEMANDANTE**

Después de hacer un breve recuento de los cambios en el sistema pensional que trajo consigo la Ley 100 de 1993, especialmente con la creación del régimen de Ahorro Individual, indicó que por tratarse de un servicio público a cargo del Estado, el hecho de que se hubiere delegado su prestación a particulares que administran el REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL, les impuso una OBLIGACIÓN a las AFP de brindar la asesoría personalizada, completa, necesaria y eficaz, con el fin de entregar al afiliado toda la información necesaria para que éste tome la mejor decisión para su vida pensional, en la medida que son las AFP quienes cuentan con el conocimiento de la normatividad que regula el Régimen de Ahorro Individual con sus características particulares, la formación en materia financiera y la experiencia, mientras que el ciudadano que pretende afiliarse, ignora tales detalles y confía plenamente en que recibirá la asesoría adecuada y completa, para de ese modo tomar una decisión informada, libre y voluntaria.

Que en ese sentido, la responsabilidad de la Administradora de Pensiones radica, no solo en informar de manera sucinta las características del nuevo régimen, sino que va más allá, pues antes de que el ciudadano diligencie y suscriba el formulario mediante el cual se concreta la afiliación o el traslado, en una asesoría personalizada, debe analizar el caso concreto de la persona, identificando minuciosamente varios aspectos que enlista, para que el futuro afiliado pueda analizar cuál es el régimen pensional que más le conviene, teniendo en cuenta la alta complejidad de la información que se debe analizar antes de la afiliación o traslado y los derechos constitucionales que se encuentran comprometidos como la seguridad social y el derecho pensional, de carácter irrenunciable.

Agrega si es deber de la entidad el brindar la asesoría e información en los términos previamente analizados, entonces puede afirmarse que se presenta un incumplimiento de esa obligación cardinal, de dos maneras: i) Cuando la información que suministra o las afirmaciones que realiza durante la asesoría son erradas; ii) Con los SILENCIOS que guarda el profesional que está brindando la asesoría, pues por el conocimiento y la capacitación que debe tener, no solo en materia normativa y financiera sino en ética del servicio. Las consecuencias jurídicas de ese incumplimiento se traducen en INEXISTENCIA DEL TRASLADO, pues el ciudadano prevalido de buena fe y confiando legítimamente en que está tomando la mejor decisión para él, suscribe el documento víctima de un engaño, sujeto a un ERROR derivado del conjunto de acciones u omisiones en que incurrió la entidad de pensiones a través de los profesionales que intervinieron en la asesoría , y ésta sola circunstancia genera la declaratoria de INEXISTENCIA del acto jurídico de afiliación o traslado, según sea el caso. No puede argumentarse que existe una manifestación libre y voluntaria, si la persona desconoce la incidencia que la decisión de traslado pueda tener frente a sus derechos prestacionales, siendo claro que las Administradoras de Fondos de Pensiones deben dar cuenta de



que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito.

Así mismo hizo un recuento de la normatividad que ha regulado el deber de información desde la creación de la ley 100 de 1993 y la evolución del mismo, para concluir que en razón de la responsabilidad profesional de la entidad, del deber de información completa y de la especial diligencia con que debe actuar, atendiendo a la importancia de la “decisión de vida” que toma la persona al confiar en que la propuesta de afiliación o traslado es lo mejor para ella, se invierte la carga de la prueba del demandante en la entidad, de manera que dentro del proceso debe ser ésta quién acredite el haber cumplido con las obligaciones constitucionales y legales que le incumbían en esta fase previa a la toma de decisión en materia de afiliación o traslado. Esta inversión de la carga probatoria, que en otras materias ha desarrollado de manera prolija el Consejo de Estado en múltiples oportunidades bajo la figura de la carga dinámica de la prueba, constituye una excepción a la regla general según la cual, quien afirma un hecho debe probarlo, pues en razón de las circunstancias, los sujetos y la forma que se presenta la situación fáctica, el deber de probar un determinado hecho se impone a la parte que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, aun cuando no lo haya alegado o invocado.

Insiste en que, en el caso concreto, la accionante demostró que la entidad demandada no cumplió con su obligación de ofrecer una asesoría en los términos indicados. La labor del funcionario del fondo privado en esa ETAPA PREVIA y PREPARATORIA a la formalización del traslado, no sólo debió ser completa y comprensible para la parte demandante, sino que debía trascender al “DEBER DEL BUEN CONSEJO”, mostrándole con detalle las diferentes alternativas, los beneficios e inconvenientes de tomar la decisión de traslado, para evitar que ella tomara una opción que claramente la perjudicaba, sin embargo las entidades no cumplieron con su obligación de brindar una buena asesoría y esa omisión la tiene inmersa en una incertidumbre respecto a su derecho pensional. El asesor del fondo privado en ningún momento le suministró información adecuada, suficiente, clara, comprensible y cierta, sobre los perjuicios que en su derecho pensional traería el hecho del traslado al régimen de ahorro individual. No le hizo un estudio previo, individual y concreto sobre las ventajas y desventajas que le aparejaría permanecer o trasladarse de régimen pensional, es decir, de dejar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. A la demandante al momento de la afiliación al RAIS, no se le realizó ni cálculo, ni proyección alguna, a pesar de contar los fondos privados, con todos los aspectos técnicos, matemáticos y financieros, para realizar la proyección de sus diferentes factores, tales como: su pensión para la fecha de cumplimiento de su edad, pensión anticipada, la redención del bono pensional, saldo que debía acreditar en su cuenta, entre otros. Incurriendo el fondo privado en

una omisión en su deber legal y Constitucional; generándole un daño patrimonial y moral, por lo que la decisión de primera instancia debe confirmarse en su integridad.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

De acuerdo con lo expuesto por las entidades recurrentes, inicialmente se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia y en caso positivo se analizará qué haberes le corresponde retornar a Porvenir S.A.

Igualmente se examinará si es procedente la imposición de la denominada medida cautelar.

No obstante, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

### **4. CONSIDERACIONES**

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para*

verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado**. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que algunos fondos privados brindaban, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna*. (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

<b>Etapas acumulativas</b>	<b>Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información</b>	<b>Contenido mínimo y alcance del deber de información</b>
Deber de información <b>ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE</b>	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben

suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, del recuento realizado, así como del interrogatorio absuelto por la demandante se desprende que para la época de traslado al RAIS, concretamente 11 de febrero de 2003 cuando suscribió el formulario de vinculación a PORVENIR (fl. 65 del archivo 01 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información** y de otro lado, que escaso era su conocimiento acerca de los diferentes regímenes pensionales.

Y es que expresamente la señora GLORIA EMILSEN CUERVO CASTAÑEDA en el interrogatorio absuelto, expuso que es licenciada en administración educativa. Respecto a su traslado al RAIS manifestó que unos asesores se acercaron a la institución educativa donde laboraba para ese tiempo, allí le brindaron una asesoría grupal con duración aproximadamente de 15 a 20 minutos, donde le informaron que el ISS se iba a terminar, que era el momento oportuno de trasladarse, que además su pensión iba a ser más alta.

Aclara que nunca tuvo la voluntad de cambiarse al fondo privado, que incluso creyó que aún permanecía en el ISS hasta el año 2011, y que la firma del formulario de vinculación obedeció a que solo tenía interés en conocer su historia laboral para lo cual uno de los asesores le ofreció ayuda y le dijo que debía signar una solicitud, la cual ella creyó que sólo se trataba netamente de su petición de historia laboral y no la de un formulario de vinculación.

Señalo que al cambiar de empleo en el año 2011 se enteró que estaba vinculada con Porvenir desde el 2003, por lo cual se dirigió a las oficinas de esta última administradora a realizar el reclamo y allí le informaron que no podía retornar ya que se le había vencido el plazo para realizar tal reclamación.

Destáquese que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó, como lo destacó el fallador, la existencia de una explicación por parte del asesor del acto que se estaba realizando.

En tal contexto, es claro que al momento de suscribir el formulario de vinculación a PORVENIR, la demandante no fue informada sobre las implicaciones de su traslado, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión anticipada en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si el obtener una pensión a una edad inferior es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se les habló de modalidades de pensión, el riesgo financiero y de longevidad, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen, y en todo caso destaca que ni siquiera sabía de la existencia de su traslado pues otra era la diligencia que pensó que estaba haciendo.

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígase aportes obligatorios,

rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a la administradora del RAIS accionada, a trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada por el a quo, quien ordenó a PORVENIR devolver TODOS los dineros percibidos por el fondo con motivo de la afiliación, precisando que ello implicaba el retorno de los tres ítems que componían los gastos de administración, debidamente indexados.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

En otras palabras, lo procedente es el retorno de la totalidad del dinero recibido por concepto de afiliación, toda vez que no se puede ver afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente al monto total del correspondiente aporte legal.

En cuanto a los rendimientos causados, los mismos NO están llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

Así mismo estima la Sala que, contrario a lo planteado en el recurso de alzada, es procedente la indexación atacada. Y es que ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente



indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021

No obstante, se ADICIONARÁ el fallo en mención, toda vez que conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltese las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021<sup>1</sup>, al momento de cumplirse la orden impartida Porvenir S.A. discriminará los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados.

En cuanto a la oposición a la CONDENA EN COSTAS que en primera instancia se impuso a PORVENIR, resulta pertinente indicar que al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General de Proceso, inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, dado que sólo se examinaba si había salido avante la totalidad o no de las pretensiones, sin atender la buena o mala fe de la entidad. Sin embargo, tal posición se fue morigerando en casos en los que no había sido la conducta de la entidad la que originaba el conflicto que hoy se pone en conocimiento de esta Sala, máxime cuando la postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento ha dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

De ahí que cualquier negativa de Colpensiones tendiente a negar administrativamente el traslado que judicialmente solicitó la accionante, no resulte caprichoso sino que proviene de la prohibición consagrada en la Ley 797 de 2003 en torno a la imposibilidad de trasladarse entre régimen cuando un afiliado se encuentra a menos de 10 años para alcanzar la edad para pensionarse.

Tal criterio se adoptó con ocasión de la expedición de la sentencia con radicado 44.454, debate que se dio desde la óptica de la improcedencia de los intereses moratorios en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encontraran justificadas.

*Mutatis mutandis*, se ha aplicado dicho criterio PERO UNICAMENTE respecto de las costas procesales que se tasan en primera instancia a cargo de Colpensiones, no así respecto de PORVENIR, pues lo que en este aspecto se analiza no es precisamente la negativa de la respuesta a un derecho de petición, sino los efectos de una afiliación a otro régimen, es el actuar u omisión de la administradora del RAIS el que cimenta la necesidad de un afiliado de activar el aparato judicial en aras de obtener la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico, habiendo salido avante las pretensiones que en tal sentido se incoaron, razón que aunada a las que preceden impiden a esta

---

<sup>1</sup> Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

Magistratura extender a PORVENIR el criterio de exoneración de costas, pues pervive para la misma ese deber de información, cuyo cumplimiento no acreditó.

## **MEDIDA CAUTELAR**

Impuso el a quo una *medida cautelar* a Colpensiones, consistente en la imposibilidad de negar o retardar el reconocimiento de la pensión de vejez a la que eventualmente tuviese derecho la actora, aduciendo NO haber recibido de la administradora del RAIS el pago de los conceptos a su cargo (entiéndase cotizaciones, rendimientos, cuotas de administración, seguros previsionales, Fondo de Garantía de Pensión Mínima), medida cautelar a la que se opuso la entidad y en ello enfocó el recurso de alzada, recordando que la pensión de vejez no comportó una pretensión, y en todo caso, cuando mediaba un traslado de régimen y posterior retorno, administrativamente tenía que agotar determinados procedimientos antes de proceder a su otorgamiento.

Para efectos de resolver la dubitativa planteada, bastaría con remitirnos a la norma que en materia laboral contempla la figura, es decir, al art. 85 del CPT y la SS, de cuya lectura NO se percibe un fundamento que justifique su imposición. Dice el legislador que la medida cautelar procede cuando un demandado efectúa actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, pero ni lo uno ni lo otro sucede en este caso. Recientemente la Corte Constitucional mediante sentencia C-043 de 2021 declaró EXEQUIBLE de forma condicionada el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, por el cargo de igualdad, en el entendido *que en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el literal "c", numeral 1, del artículo 590 del Código General del Proceso*. No obstante, aunque la norma en mención autoriza al juez a imponer cualquier tipo de medida, estima que la misma debe ser razonable para la protección del derecho en litigio o asegurar la efectividad de la pretensión y es ahí cuando surge un primer obstáculo.

Al NO comportar la pensión de vejez objeto de súplica, ni haber sido un asunto debatido en el proceso respecto del que las partes hubiesen ejercido el derecho de defensa, no era dable su análisis, mucho menos la concesión una medida cautelar para proteger un eventual derecho.

Ya la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del tema en múltiples ocasiones, entre ellas cuando en sentencia de radicación 58.621, rememorando algunas que le antecedían, señaló que:

En efecto, la causa petendi de la demanda inicial está conformada por las razones de hecho y de derecho que fundamentan las pretensiones, y el sentenciador conforme al principio de congruencia, no puede alterar o cambiar los hechos o las súplicas para entrar a decidir en uno u otro sentido, y darle la razón al demandante o al demandado. En materia laboral, la congruencia encuentra una excepción, en cuanto a que la ley permite que los

juzgadores de única y primera instancia fallen en torno a súplicas distintas a las pedidas, haciendo uso de las denominadas facultades extra y ultra petita que consagra el citado artículo 50 del CPTSS, cuando los hechos que las originen hayan sido discutidos en el proceso y están debidamente probados, facultad que también tiene el fallador de segundo grado, cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables del trabajador.

En este orden de ideas, si no fue debatido el punto, ello vedaba al operador jurídico de algún pronunciamiento, ya que, se insiste, NO puede sorprenderse a la parte resistente examinando asuntos que en un principio no fueron puestos a consideración del juez ni mucho menos se delimitaron al fijar el litigio. Tampoco se trata de examinar la procedencia de un derecho mínimo e irrenunciable, pues NO es la pensión lo debatido.

Aunado a lo anterior, razón le asiste a Colpensiones cuando destaca la importancia de agotarse previamente algunos trámites con antelación al reconocimiento de la eventual prestación por vejez, como lo es la actualización de la información reportada al SIAF y el traslado de la información, obligaciones a cargo de Porvenir, de lo contrario ni siquiera contaría con la base de datos para efectos de contabilizar las semanas pues en la historia laboral evidentemente sólo figuran las aportadas al régimen de prima media, no así al RAIS.

En todo caso, NO se trata de establecer si el pago de la pensión está sometido al recaudo efectivo, pues tal análisis sería procedente si la prestación por vejez comportase una pretensión, lo que en este caso NO ocurre, ni tampoco fue un hecho discutido.

Visto así las cosas, se revocará la decisión a través de la cual se impuso a Colpensiones la aludida medida cautelar.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA PARCIALMENTE** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, adicionándola y revocándola en los aspectos antes aludidos.

Se condenará en costas en esta instancia a PORVENIR S.A. por no haber tenido éxito en el recurso. Se fijará como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 a favor de la accionante.

## 5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

**PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE** la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **GLORIA EMILSEN CUERVO CASTAÑEDA** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.410.529 contra **PORVENIR S.A y COLPENSIONES**.

**SEGUNDO: se ADICIONA** el numeral segundo del fallo, bajo el entendido que **PORVENIR S.A.** al momento del pago, deberá discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.


**TERCERO: REVOCA** la medida cautelar impuesta a Colpensiones.

**CUARTO:** Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 a favor de la accionante.


Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

(Firmas escaneadas)


Los Magistrados,



**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**



**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN
Demandante:	<b>GLORIA EMILSEN CUERVO CASTAÑEDA</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES y PORVENIR S.A</b>
Radicado No.:	05001-31-05-004-2018-00601-01.
Tema:	Ineficacia traslado
Decisión:	<b>MODIFICA</b>
Fecha de la sentencia:	<b>12/08/2022</b>

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 16/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**Secretario**